

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Luis Fernando Arías Bedoya
DEMANDADA	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 04 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>004 2017 00673</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 53 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobrevivientes hijo invalido – la disfrutó el padre porque en dictamen se estructuró invalidez 5 días después de fallecimiento de madre, de quien dependía económicamente. Acredita requisitos.
DECISIÓN	Confirma.

En la fecha, **veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de **Colpensiones y grado jurisdiccional de consulta** en lo no recurrido, ordenado en sentencia dentro del proceso ordinario promovido por **Luis Fernando Arias Bedoya**. Radicado único nacional 05001 3105 **004 2017 00673** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº006**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Pretende la parte actora el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, en calidad de hijo inválido, con ocasión del fallecimiento de su señora madre **Orfa Ruth Bedoya Goez**, pide también intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y condena en costas.

En sustento de ello afirma que **Orfa Ruth Bedoya Goez**, falleció el **02 de junio de 1995, por causas naturales**, siendo el demandante uno de sus descendientes, como se acredita con registro civil de nacimiento, y encontrándose en condición de discapacidad para tal calenda, dependiendo económicamente de su progenitora, quien laboraba como empleada de servicio en casas de familia, cotizando al entonces ISS un total de 222 semanas y para el ultimo año 36, razón por la que reclamó pensión el 20 de abril de 1997, negada el 21 de mayo de 1998, por no acreditar dependencia económica, de lo que se desprende que no tuvo discusión su condición de invalido. El **28 de abril de 2010** su padre **José Reinaldo Arías Usuga, en calidad de cónyuge de la señora Orfa**, reclamó la pensión de sobrevivencia, otorgada con Resolución 0165302 del 20 de junio de 2011, falleciendo el señor Reginaldo el **22 (sic) de diciembre de 2016**. Agrega que el señor Luis Fernando, a la edad de diez años sufrió un accidente que le ocasionó la pérdida de la visión por el ojo izquierdo y posteriormente tuvo desprendimiento de retina del ojo derecho en el año 1987, razón por la que para la fecha de muerte de su madre era una persona invalida y dependía económicamente de ella. El 17 de enero de 2017 el demandante se realizó calificación de PCL cuyo resultado fue de **85% con fecha de estructuración el 07 de junio de 1995**, calenda de la que discrepa porque perdió la visión en época anterior al deceso de su progenitora. Nuevamente pidió la prestación por sobrevivencia a

Colpensiones el **07 de marzo de 2017**, negada con Resolución SUB 52132 del 04 de mayo del mismo año, quedando así agotada la reclamación administrativa.

En **auto del 02 de agosto de 2017 se admitió y ordenó** dar trámite a la acción, debidamente notificada, dentro del término para ello, la entidad convocada por pasiva allegó escrito de contestación aceptando el número de semanas cotizadas al sistema pensional por la fallecida, la reclamación de pensión por su cónyuge José Reinaldo Arias en el año 2010, y su otorgamiento con acto administrativo del 20 de junio de 2011; también es cierta la reclamación administrativa efectuada por el demandante, y la respuesta negativa frente a la prestación reclamada. Los demás supuestos no le constan. **Resistió** las pretensiones y formuló **las excepciones** de: inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de lo solicitado, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios por no haberse incurrido en mora, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

La primera instancia terminó con **sentencia**, proferida el **07 de febrero del año en curso por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito**, declarando y condenando a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante, en condición de hijo invalido de **Orfa Ruth Bedoya Goez**, fallecida el 02 de junio de 1995, **pensión de sobreviviente** a partir del **08 de diciembre de 2016**, cuando fallece su padre **José Reginaldo Arías Usuga**, a quien le fue otorgada en un 100% con Resolución Nro. 016302 del 20 de junio de 2011. **Para el demandante esta prestación será temporal, mientras subsistan las circunstancias que le generan invalidez,**

con derecho a afiliación al sistema pensional, calculando el retroactivo adeudado entre el **08 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2023, en la suma de \$75.380.411; a partir del mes de marzo de 2023, se continuara pagando mesada equivalente a \$1.160.000,00.** Impuso a Colpensiones condena a intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas adeudadas, a partir del **07 de julio de 2017. Desestimó las excepciones propuesta,** y condenó a la parte vencida en costas, fijando las agencia en derecho en **\$6.000.000,00.**

Argumentó el juzgador que en los autos quedaron acreditados los requisitos exigidos al hijo invalido para obtener la pensión de sobrevivencia con ocasión del fallecimiento de su progenitora, según los **artículos 46 y 47 originales de la Ley 100 de 1993,** esto es, el vínculo filial, que se deduce del registro civil de nacimiento; la condición de invalidez de origen común, que según dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia expedido el 22 de mayo de 2019, fijó la PCL en **67,70%, con fecha de estructuración el 01 de diciembre de 1982,** lo que encuentra soporte en la historia clínica allegada, desvirtuándose la conclusión a la que arribó el médico laboral de Colpensiones en valoración efectuada el 19 de enero de 2017, determinándole una PCL de **85% origen común, estructurada el miércoles 07 de junio de 1995,** encontrando procedente otorgar la pensión reclamada, sin que exista discusión frente a la causación del derecho, pues el mismo fue otorgado administrativamente al señor José Reginaldo, su padre, fallecido el **08 de diciembre de 2016,** por lo que consideró procedente otorgar el 100% de la mesada al señor Luis Fernando desde tal calenda, sobre la base de un salario mínimo legal mensual

vigente, liquidando el retroactivo generado hasta el 28 de febrero de 2023.

Para la imposición de los intereses moratorios adujo que fue a todas luces equivocado y contrario a la historia clínica el dictamen emitido por Colpensiones, toda vez que existe en el plenario suficiente soporte para afirmar, como lo hizo la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que la PCL se estructuró el **01 de diciembre de 1982**.

La apoderada de **Colpensiones**, manifestó inconformidad parcial frente a lo decidido, atacando únicamente **la condena a intereses moratorios**, porque la negación del derecho obedeció al dictamen emitido por la Junta Médica Laboral, fijando una fecha de estructuración de PCL posterior al fallecimiento de la progenitora del aquí reclamante, lo que evidenciaba el no cumplimiento de los requisitos como dependencia económica y pérdida de capacidad laboral, y solo en este proceso con la sentencia, con la valoración de la Junta Regional, con la prueba testimonial e interrogatorio se evidenció que la estructuración fue anterior, por lo que Colpensiones no debe ser condenada a este pago al no estar en mora en la cancelación de mesadas, obedeciendo la negativa a la no acreditación de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la prestación económica, los que solo quedan definidos con la providencia del 07 de febrero de 2023, en la que se da plena certeza del reconocimiento y pago de la pensión con su retroactivo.

En lo no recurrido, desfavorable a esta entidad, se conoce en grado jurisdiccional de **consulta**.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **la apoderada de Colpensiones**, insistiendo en la **improcedencia de la condena a intereses moratorios**, pues solo en este trámite se definió la fecha de estructuración del estado de invalidez del demandante, pronunciándose la entidad con fundamento en el que fijo como tal una anterior al deceso de su progenitora, luego no se dan los supuestos de pago tardío o no cumplimiento de una obligación. En sustento cita apartes de la sentencia SL11897 de 2016.

Y en el evento de mantenerse tal condena ruega tener en cuenta lo explicado en sentencia T – 588 de 2003, C 1024 de 2004 , SU 065 de 2018, de las que transcribe apartes, enfatizando en que, *no ha incurrido en mora en el reconocimiento de mesadas pensionales, mismas que solo hasta la actuación se reconocen, en caso tal de incurrir en mora deberá contabilizarse de ser el caso en el momento de incumplir en los tiempos estipulados de respuesta para cumplimiento de sentencia judicial, situación que a todas luces tampoco se observa pues se están surtiendo los recursos en la instancia respectiva sin a la fecha estar ejecutoriada la sentencia judicial.*

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones:**

Como hechos debidamente acreditados en los autos y no sujetos a debate se tienen: La fecha de fallecimiento de la señora **Orfa Ruth Bedoya Goez, ocurrido el 02 de junio de 1995**, por causa común; la filiación madre –hijo de la señora Orfa con el aquí demandante, Luis Fernando Arias Bedoya, según se deduce de registro civil de nacimiento visible a fls. 10 del expediente digitalizado, siendo su padre el señor **José Reginaldo Arias Usuga**, y su fecha de nacimiento **01 de septiembre de 1969**.

De la documentación aportada se tiene también que el 20 de abril de 1997 se reclamó por el señor Luis Fernando la pensión de sobrevivientes, negada por no acreditación de dependencia económica y tener estado de invalidez con estructuración anterior a la fecha del deceso de su progenitora; el **28 de abril de 2010**, se solicitó la misma prestación por el señor **José Reginaldo Arias Usuga, en calidad de cónyuge de la señora Orfa**, otorgándosele a partir del 28 de abril de 2006, en cuantía de una mesada mínima, **falleciendo el señor José Reginaldo el 08 de diciembre de 2016, como consta en documento civil aportado con el escrito de demanda.**

En dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado al demandante por Medicina Laboral de Colpensiones, con fecha 19 de enero de 2017, se le fijó un porcentaje de **PCL del 85% con fecha de estructuración el miércoles 07 de junio de 1995**, documento con el que solicitó nuevamente la prestación que ahora reclama, con documentación radicada ante Colpensiones **el 07 de marzo de 2017**, negada con acto administrativo SUB 52132 del 04 de mayo de 2017, por haberse estructurado la invalidez en fecha posterior al deceso de la afiliada.

Así las cosas, teniendo en cuenta **el grado jurisdiccional de consulta** y el **recurso de apelación** interpuesto, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer: **si el demandante en condición de hijo, demuestra invalidez y dependencia económica de su progenitora**, señora Orfa Ruth Bedoya Goez, **para la fecha del deceso, 02 de junio de 1995**, y con ello definir el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, la

fecha de su disfrute y la procedencia o no de intereses moratorios y de condena en costas.

Por la fecha de fallecimiento de la afiliada, **02 de junio de 1995**, la norma a observar para definir el derecho pensional, como correctamente lo indicó el a quo, son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, estableciendo la primera norma:

***2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:***

***a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;***

***b) ....***

Supuesto que dejó acreditado la fallecida, al punto que mediante Resolución Nro. 016302 del 20 de junio de 2011, se le otorgó la pensión a su cónyuge **José Reginaldo Arías Usuga, quien la disfrutó hasta la fecha de su deceso, 08 de diciembre de 2016.**

Frente al **estado de invalidez del peticionario**, si bien en valoración efectuada por el médico laboral de Colpensiones se le fijó **PCL del 85% estructurada el 07 de junio de 1995**, sustentándose esta **en consulta oftalmológica** de tal fecha en la que se lee:

***MC: "no ve nada" desprendimiento de retina hace 6 años OD después progreso catarata, operado de catarata hace 10 años, OI no ve tampoco, TA 4/10, Bio OD opacidad por catarata, OS severa por cataratas, FdOjo OD no posible visualiza. OS retina pálida (RP)?? Eco: estafiloma OD OS: drussel? Ap: negativos, oculares: cirugía de retina 2 veces OD hace 6 años AV OD PL (+) OS PL (-).***



Con el fin de tener mejores elementos de juicio, en consideración a la documentación allegada con el escrito de demanda y al cuestionamiento que a la fecha de estructuración se hizo por la parte activa, el juzgador de primer grado dispuso la **valoración del señor Luis Fernando por la Junta Regional de Calificación de Invalidez**, entidad que en experticia del 22/05/2019, determinó **PCL del 67,70%, fecha de estructuración 01/12/1982**, teniéndose como diagnósticos específicos: *atrofia óptica, ceguera de ambos ojos, hipoacusia neurosensorial, bilateral, otros glaucomas, trastorno de la retina, no especificado,*

*Soportado en concepto de clínica Clofán y Hospital San Vicente de Paúl Fundación en notas del 20/2/2010 y 28/04/200 donde consta "ciego del ojo siniestro desde los 11 años de edad y del derecho con glaucoma y desprendimiento de retina desde 1982 av: od no ve no reversible, oi visión sub anormal post quirúrgico de glaucoma" donde se configura un 50% de su pérdida de capacidad laboral por afectación del órgano de la visión.*

Conclusión que encuentra respaldo en **formulario del Instituto Nacional para Ciegos – INCI** – diligenciado el 21 de enero de 1988, en el que se deja consignada la pérdida de visión del señor **Luis Fernando**, al igual que en certificado de Coomeva EPS, del 11 de noviembre de 2016, en el que se describe como **DIAGNOSTICO DE MANEJO: GLAUCOMA+DESPRENDIMIENTO DE RETINA OJO DERECHO ARTROFIA OPTICA OJO IZQUIERDO (CEGUERA BILATERAL). TIEMPO DE EVOLUCION antecedente de trauma en cráneo a los 10 años de edad con pérdida de la visión por ojo izquierdo. Desprendimiento de retina en ojo derecho en 1987, con pérdida de la visión.**

Y es que incluso, **resulta incoherente que Medicina Laboral de Colpensiones, haya fijado la fecha de estructuración de la invalidez en la nota de atención por oftalmología del 07/06/95, donde se dijo**

**MC: "no ve nada" desprendimiento de retina hace 6 años OD después progreso catarata, operado de catarata hace 10 años, OI no ve tampoco, TA 4/10, Bio OD opacidad por catarata, OS severa por cataratas, FdOjo OD no posible visualiza. OS retina pálida (RP)?? Eco: estafiloma OD OS: drussel? Ap: negativos, oculares: cirugía de retina 2 veces OD hace 6 años AV OD PL (+) OS PL (-).**

Pues evidente resulta que en tal consulta se deja claro que **NO VE NADA**, y se  **fija el desprendimiento de retina en 06 años atrás y las operaciones de catarata y cirugía de retina en 10 años y 06 años antes, en su orden, por lo que no queda duda que la pérdida de visión se dio con antelación a la consulta del 07 de junio de 1995**, encontrándose debidamente sustentada la fecha de estructuración fijada por la  **Junta Regional de Calificación de Invalidez**, frente a la que no se formuló reparto alguno dentro del término otorgado para ello, estando la misma debidamente soportada la historia clínica, diagnósticos y alteraciones, con la debida justificación de los porcentajes asignados a los roles ocupacional y otras áreas, detallándose las tablas y baremos utilizados. Luego, para la fecha del deceso de su progenitora, **02 de junio de 1995**, si tenía el demandante PCL superior al 50%, **67,70 estructurada el 01 de diciembre de 1982**, superando así el requisito de filiación y la condición de invalido exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Y como nació el **1º de septiembre de 1969**, para la ocurrencia del óbito de su madre contaba con 25 años de edad, **debiendo demostrar dependencia económica**, que acredita con las declaraciones de las señoras **Lía del Carmen López de González**, empleadora de la señora **Orfa Ruth Bedoya Goez**, quien da cuenta de la afiliación al sistema pensional y de las dificultades económicas

que afrontaba su grupo familiar, pues el cónyuge de esta, señora José Reginando Arias laboraba esporádicamente como ayudante de construcción y muy poco contribuía al sostenimiento del hogar por tener adicción al licor, quedando el mismo prácticamente a cargo de la señora Orfa Ruth, con los ingresos que obtenía como empleada doméstica y las ayudas que en especie lo prodigaba la referida declarante, en especial para Luis Fernando que era el hijo que se quedaba en la casa, pues tuvo una enfermedad en los ojos que no fue debidamente tratada y a la postre perdió en su totalidad la visión, sobre el punto explica que **se enteró de problemas de limitación visual de Luis Fernando**, *porque un día Orfa llegó triste y me dijo no tengo plata para llevar el niño donde el optómetra, me dijo que no veía, tenía que acercarse el libro a los ojos, yo le conseguí una cita en la Noel y le diagnosticaron desprendimiento de retina de un ojo y el otro lo perdió desde niño, ella empezó a voltear con él hasta que lo operaron en 1982.* Sabía que Orfa prácticamente *llevaba el 95% de la obligación de la casa porque cuando el esposo laboraba compraba unas cositas el día que le pagaban y el resto le tocaba todo a Orfa. Él era algo irresponsable le gustaba mucho el licor.* Para la fecha de la muerte de Orfa, en 1995, **era esta quien mantenía a Luis Fernando, porque el papá llevaba de pronto cositas a la casa, pero era poco lo que aportaba**, y después de la muerte de su señora madre, *Luis Fernando empezó a hacer trabajos e ingreso a la universidad, los trabajos que hacía era vendiendo dulces, hizo una revista, cosas mínimas para pasajes, en la universidad yo le ayude, él se ganó media beca, yo mi esposo y mi mama hacíamos rifas, que sepa el papá no le ayudó.* Después de haber quedado ciego y vincularse al INCI, Luis Fernando inició estudios de bachillerato, él grababa las clases y estudiaba, cuando era un libro el hermano le leía, cuando la mama murió le consiguieron la matrícula en la Universidad. Él trabajó alguna vez, creo que con el Municipio de Medellín pero no le duró mucho, porque es difícil que en un empleo se acepte una persona con discapacidad.

La señora **Luz Ofelia Builes Ochoa**, licenciada en educación, conoce a Luis Fernando Arías desde 1988 cuando ella ejercía su labor en el Instituto para Ciegos en Antioquia, y allí él inició el trabajo de rehabilitación, conoció también a su familia, la mama de Luis Fernando era la acudiente de él en el INCI, Orfa. ***Poco conoció al papá. La mamá trabajaba como empleada doméstica y sostenía el hogar.*** La testigo como empleada del INCI hizo el estudio y clasificación socioeconómica del grupo familiar del demandante, explicando que en el mismo se estableció que el papá trabajaba esporádicamente, y se ayudaban con ventas de cositas en la casa: empanadas, bolis, explicando que el barrio donde vivían era de tipo marginal, era estrato uno, barrio Guadalupe, comuna uno, en una casa sencilla, en la clasificación les dio estrato dos. El hogar estaba conformado por padre, madre y cinco hijos, 3 hombres y dos mujeres. Orfa falleció el 02 de junio de 1995, para esa época Luis Fernando llevaba varios años en el INCI, inició en 1988, no tenía otros hermanos con limitaciones físicas. Luis Fernando tuvo desprendimiento de retina. Agrega la deponente que para el **momento fallecimiento de Orfa Fernando no tenía actividades que le generaran ingresos, estaba en el INCI**, y tenía su acompañamiento como trabajadora social, es un equipo interdisciplinario para la rehabilitación psíquica, aceptar la ceguera, la física, aprender a caminar y la lecto escritura. Insiste **en que el sustento económico de Luis Fernando para 1995 era el sueldo de la mamá**, para el año 1997 se estaba cerrando el programa del INCI y no tuvo más contacto con Luis Fernando, pero hasta ese entonces la familia lo apoyaba con los escasos recursos y aprovechó las ayudas de entidades públicas y de universidades de corte religioso, y aunque logró capacitarse, indica que la integración laboral de los limitados visuales es difícil por sus mismas condiciones, a lo que se suma su problema de diabetes. En la actualidad dicta clases

esporádicas a población en su misma condición. Concluye en que la impactó la llegada de Luis Fernando al INCI por la enfermedad padecida, y porque a pesar de sus condiciones socio económicas y su limitación, siempre era un joven que quería salir adelante.

Se allegaron también declaraciones con fines extra procesales ante la Notaria 17 del Circulo de Medellín, con fecha 13 de febrero de 2017, vertidas por las señoras **María Bertilda Arcila de López y Lía del Carmen López de González**, quienes dan cuenta del conocimiento de trato y comunicación durante quince años con la señora **Orfa Ruth Bedoya Goez**, quien falleció el 02 de junio de 1995, y en virtud de ese conocimiento saben y les consta que para el momento de la muerte era casada y tenía sociedad conyugal vigente con el señor José Reginaldo Arías Usuga, unión en la que procrearon cinco hijos, tres hombres y dos mujeres, uno de ellos **Luis Fernando**, quien padece una limitación física (**ceguera total**) **determinada en el mes de marzo de 1987, por lo tanto él dependía de forma total y económica de los ingresos de su madre.**

Superándose también el requisito de dependencia económica, **que debe ser analizado para la fecha de ocurrencia del deceso de la afiliada**, sin que tenga incidencia el desempeño posterior de labores esporádicas que le generen algunos ingresos intermitentes, pues como se explica por la Corte Constitucional: *tratándose de la dependencia económica que el hijo inválido debe acreditar respecto del causante, esta Corporación estima que si bien la norma contempla que el hijo no tenga ningún ingreso adicional al recibido de manos del de cujus, una correcta interpretación deja entrever que hace referencia a entradas económicas fijas, estables y permanentes en el tiempo que den seguridad financiera al discapacitado. Quiero ello decir que, cuando el hijo inválido percibe ingresos ocasionales que por su naturaleza no son periódicos ni le brindan estabilidad para*

*procurarse la digna satisfacción de todas sus necesidades básicas, se debe otorgar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. No se puede esperar que se encuentre el discapacitado en situación de total indigencia y sin recurso alguno, para que pueda acceder al derecho prestacional, más aún cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional, agregando que a la hipótesis del hijo son también aplicables las reglas 4 y 5 establecidas en sentencia C – 111 de 2016, esto es: La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes, criterio reiterado en las sentencias T – 471 de 2014 y SL 1458 – 2015 Sala Laboral Corte Suprema de Justicia.*

Luego, acertada resulta la decisión de primera instancia en cuanto otorgó el derecho pensional al demandante en un 100%, a partir de la fecha de la extinción del de su padre, **08 de diciembre de 2016, con mesada equivalente al salario mínimo legal vigente, 14 al año, ascendiendo el retroactivo adeudado al 28 de febrero de 2023 a la suma de \$74.711.641,00** ello porque de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 100 de 1993,

*Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, **junto con la mesada del mes de noviembre, en la primera semana del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional de pensión.***

sin que haya lugar a esta mesada en el año inicial como lo consideró el a quo.

2016	5,75%	0,76	\$ 689.454	\$ 523.985
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022	13,12%	14	\$ 1.000.000	\$ 14.000.000
2023		2	\$ 1.160.000	\$ 2.320.000
TOTAL			\$ 74.711.641	

Frente a la inconformidad de **Colpensiones**, relacionada con la condena a los **intereses moratorios**, es de indicar que en la sentencia SL2117-2022, donde se reitera lo expuesto en la SL3130-2020, la Corte preciso aspectos frente a este concepto, así: *i)* su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición; *ii)* buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y *iii)* existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. Así, el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios, por lo que se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones.

Para el caso concreto, como se explicó por el a quo, **no se contaba con ninguna razón objetiva o sustento valido para fijarse por Medicina Laboral del ISS, la fecha de estructuración del estado de invalidez del demandante el 07 de junio de 1995**, calenda en que acudió a consulta oftalmológica en que se dejó registrado “**no ve nada**”, explicándose los episodios en que se dio la perdida de visión por cada ojo, luego, existiendo una protección de orden constitucional para las personas en circunstancias de debilidad

manifiesta, prevista en los artículos 13 y 47 superiores, procedente resulta la imposición de tales intereses en la forma dispuesta por la primera instancia. **Se confirma también la decisión en este punto.**

Y finalmente, en lo atinente a la **condena en costas**, es pertinente recordar, que son aquellas erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, dentro de las cuales se incluyen las agencias en derecho, valor que el juzgador le da al trabajo del abogado que ha triunfado en el trámite del conflicto, que deben ser asumidas por la parte que resulte vencida judicialmente.

No sobra añadir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en forma reiterada ha adocinado, que **las costas no son consecuencia de un proceder determinado de las partes, de suerte que no interesa para su imposición que se haya actuado de buena o mala fe** (CSJ AL4123-2019). Así mismo, se ha establecido que la mentada condena contiene una obligación procesal que se «*dirige contra el patrimonio de la parte vencida y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir*» (ver autos CJS AL3132-2017, CSJ AL3612-2017, CSJ AL5355-2017, CSJ AL2924-2022, CSJ AL2952-2022 y CSJ AL 5445-2022).

Se mantiene esta condena en primera instancia a cargo de la accionada, y se imponen también en esta, al carecer de sustento los argumentos en que se fundó la alzada. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000** a favor del demandante.



En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Luis Fernando Arias Bedoya** en contra de **Colpensiones**.

**Costas** en esta instancia a cargo de Colpensiones, a quien se desata adversamente el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00**.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**